

Escala Crítica/Columna diaria

*Dejan pesada carga crediticia administraciones salientes *Asume Durazo Montaña en Sonora, un estado en la mira *La pobreza aumenta vulnerabilidad y costos de catástrofes

Víctor M. Sámano Labastida

NO A LAS DEUDAS injustificadas y mucho menos “los moches”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder ayer a una pregunta sobre los gobiernos de Durango y Baja California Sur. Reiteró su política de no hipotecar al país. Como usted sabe, hay estados con deudas tales que tienen comprometido ya todo el recurso público que recibirán en 2021. Un caso similar ocurre con municipios que carecen de dinero para obras y mejoramiento de los servicios.

En comparativos per cápita (por habitante), las entidades más endeudadas son Nuevo León (14 mil 660.3 pesos por persona); Quintana Roo (13 mil 149.2 pesos); Chihuahua (12 mil 634.7 pesos); Coahuila (11 mil 654.6 pesos) y Ciudad de México (9 mil 570.8 pesos).

Pero la hipoteca no es una condena, no es un destino. Aunque el promedio por habitante de las deudas estatales es de 4 mil 709.4 pesos (otra es la deuda nacional), hay cinco entidades cifras muy por debajo: Tlaxcala, con 6.9 pesos por persona; Querétaro, 104.3 pesos; Guerrero, 903.3 pesos; Puebla, 952.8 pesos y Guanajuato, con un mil 401.4 pesos.

López Obrador pidió a los militantes de los partidos actuar en las instancias correspondientes si existiera un comportamiento inmoral en sus gobernantes. En donde, como en Durango, los diputados votaron a favor del incremento de la deuda, es necesario saber si hay justificación y en qué se va a usar el dinero.

Comentó el mandatario: “Históricamente se cuidaba, porque así lo establece la Constitución, que todo lo que significaba deuda tenía que destinarse a inversión, a obras y a programas que pudieran ser auditados, por eso era relativamente fácil saber cómo se habían endeudado los gobiernos”.

Explicó que es distinto cuando se solicitan recursos mientras llegan las asignaciones federales. Y añadió: “Lo que también no debe de permitirse y se puso de moda durante el periodo neoliberal es que se endeudaban los estados para tener recursos; pero, además, del pago de intereses se tenía que entregar una cantidad de esa deuda a los partidos que votaban para que se aprobara la deuda, había moches”.

¿Los partidos están ahora en capacidad y disposición para vigilar ya no a los opositores sino a los gobiernos emanados de sus filas?

UNA ENTIDAD MINERAL

ALFONSO Durazo Montaña es uno de los once integrantes de Morena que ganaron las elecciones para las gubernaturas en junio reciente. Ayer tomó posesión. También es uno de los políticos más versátiles y longevos en los primeros sitios de la toma de decisiones. Fue secretario particular de Luis Donald Colosio (PRI), se unió a la campaña de Vicente Fox (PAN) de quien fue secretario particular y director de comunicación social, cargo al que renunció por desacuerdos con el panista; en 2006 se sumó a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador (PRD), en 2012 continuó con AMLO ahora al frente del Movimiento Progresista en Sonora y en 2018 también con López Obrador (Morena), en cuyo gabinete fue secretario de Seguridad.

En este largo trayecto ha sido diputado y senador, ahora gobernador del segundo estado más extenso de la República (179 mil 35 kilómetros cuadrados) con apenas tres millones de habitantes. Para que tengamos una idea de lo que esto significa, Tabasco tiene sólo 25 mil 267 kilómetros cuadrados y 2 millones y medio de pobladores.

Desde la época de la Colonia española, Sonora fue objetivo de los buscadores de oro, plata, hierro, plomo y otros minerales. Ahora está en la mira de las corporaciones y gobiernos extranjeros por el litio.

Recibió el gobierno de manos de Claudia Pavlovich Arellano (PRI). Entre las designaciones que realizó para su gabinete destaca María Dolores del Río, secretaria de Seguridad Pública. Una de las medidas inmediatas es el inicio del mando único policial, con un acuerdo político con los 72 municipios de la entidad.

DESASTRES QUE SON LASTRE

ES CIERTO, mucha agua ha corrido en nuestros pueblos y ciudades en los últimos 30 años, pero aun así están vigentes estudios como los de Mary B. Anderson que cité ayer en mi columna (¿QUÉ CUESTA MÁS, LA PREVENCIÓN O LA RECUPERACIÓN?, publicado en 1994 por la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina). En los tiempos recientes, y más todavía en Tabasco, hemos tenido la desgracia de comprobar lo acertado de la síntesis de varios estudios.

Escribió Anderson algo que ya hemos conversado en entrevistas con Rodolfo Uribe, Firdaus Jhabvala, Emmanuel Munguía y otros más: “La pobreza aumenta la vulnerabilidad a las catástrofes. La mayor parte se presenta en países subdesarrollados y la gente que más sufre es casi siempre la más pobre de la sociedad. Un estudio (Undro, 1976) estimaba que el 95%

de las muertes por desastres se registraba entre el 66% de la población que vive en los países tercermundistas”.

Así, “en Japón, por ejemplo, el número de víctimas promedio anual por desastre natural es de 63; en Perú, con una incidencia similar de desastres naturales, el número de muertes anuales es de 2 mil 900 (Anderson, 1985). Los acontecimientos naturales destruyen vida y propiedades en cada país, pero las pérdidas, en relación con los recursos de una nación, son más onerosas entre los Estados más pobres. Las pérdidas económicas absolutas pueden ser superiores en los países ricos, porque se perjudica más propiedad de superior valor, pero la reducción del PNB por causa de desastres es cerca de veinte veces mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados (Funaro-Curtis, 1982). La pobreza aumenta la probabilidad de que una crisis se convierta en una calamidad”.

De hecho una catástrofe significa la pérdida de años en los índices de mejora de la vida de personas, familias y comunidades. ¿Cuántos años retrocedió Tabasco en 2007, en 2009, en 2020...? (vmsamano@hotmail.com)